

El enigma Lula:

LA DIFÍCIL CARACTERIZACIÓN DE SU GOBIERNO*

Emir Sader**

El nuevo ciclo de la izquierda brasileña, iniciado con las huelgas obreras de finales de los años setenta, desembocó en la elección de Lula en 2002, como presidente de la República. Dicha izquierda también recorrió, a su manera, los dos primeros ciclos de estrategia política de otros países del continente. Antes de Lula y el Partido de los Trabajadores (PT), con el golpe militar de 1964 se había dado el agotamiento del modelo reformista clásico —del cual los gobiernos de Getulio Vargas (1930-45 y 1950-54) y João Goulart (1961-64) fueron los ejemplos más significativos—, al que siguió una breve etapa de resistencia armada, de 1966 a 1971. Ésta encontró su límite cuando la represión desarticuló los movimientos populares, provocando una marginación de la izquierda. La agudización de los enfrentamientos derivados de la resistencia armada acentuó tal aislamiento, que la llevó a una derrota relativamente rápida.

*Traducción del portugués de Marco Lara Klahr.

**Sociólogo brasileño. Actualmente es secretario ejecutivo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO). El presente artículo es una versión abreviada de uno de los capítulos de un libro de próxima aparición.

El gobierno de Lula es resultado de la fuerza acumulada, primero, por la prolongada resistencia a la dictadura y luego, ya durante la redemocratización, por la oposición contra el neoliberalismo, a lo largo de la década de los noventa, como tercer capítulo en la trayectoria de la izquierda brasileña y en un momento lleno de contradicciones.

El gobierno de Lula ha recibido ya los más contradictorios calificativos: de mejor administrador del modelo neoliberal, como crítica de la izquierda, al de practicante del populismo estatista, según la mayor campaña que la derecha y los medios oligopólicos realizaran en el país valiéndose de denuncias de escándalos. Lula lleva a cabo una política social que conquista el apoyo popular como ningún otro gobierno lo había conseguido (el 80 por ciento de apoyo y sólo un 8 por ciento de rechazo en el sexto año de su gobierno, mientras que su antecesor, Fernando Henrique Cardoso, tenía apenas el 18 por ciento de apoyo), pero, al mismo tiempo, recibe ataques sistemáticos de sectores de la izquierda radical, nacionales e internacionales, por no haber roto con el modelo económico heredado. De algunos de estos sectores recibe un apoyo crítico y de otros el fuego principal. Para

los primeros es la expresión moderada de la izquierda, para los segundos un traidor de la izquierda que debe ser combatido como el enemigo principal.

Puede también ser considerado una expresión de izquierda por sus políticas sociales, por haber rechazado el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) y por privilegiar los procesos de integración regional y la Cooperación Sur-Sur, así como por haber frenado el proceso de privatización y debilitamiento de las capacidades de intervención estatal y el proceso de precarización de las relaciones laborales, y aumentado sistemáticamente el empleo formal, reduciendo el desempleo y elevando el poder adquisitivo del salario mínimo.

¿Cuál es la naturaleza del gobierno de Lula? No descifrar este enigma ha llevado a la derecha a reiteradas derrotas, así como a la incapacidad de la izquierda—desde la más radical hasta la más moderada— para desenvolverse frenando el proceso de despolitización en curso y situándose de manera correcta frente a la polarización política y social que vive Brasil.

¿Cómo pudimos llegar al periodo histórico profundamente contradictorio que vivimos, expresado de manera más concreta en el gobierno de Lula?, ¿qué significa este gobierno en la historia política de Brasil?, ¿qué significa el nuevo periodo introducido por su gobierno?, ¿cuál es el significado del enigma Lula?

EL SURGIMIENTO DEL NUEVO PT Y EL NUEVO LULA

Las elecciones de 1994 fueron el punto de viraje en la correlación de fuerzas en Brasil. Si bien, la victoria de Fernando Collor de Mello cuatro años antes (1990) había comenzado a construir un consenso neoliberal, el posterior *impeachment* y las protestas populares en su contra interrumpieron el primer proyecto coherente de implementar un modelo neoliberal en Brasil.¹ El que Lula hubiera estado entonces tan cerca de la victoria—fue el candidato favorito durante gran parte de la

¹Fernando Affonso Collor de Mello fue presidente de Brasil entre 1990 y 1992, y un impulsor decidido del neoliberalismo. Tras un escándalo de corrupción, dejó el cargo en septiembre de 1992, en el contexto de intensas movilizaciones populares que exigían juicio político en su contra. Lo sustituyó como presidente interino Itamar Franco, cuyo gobierno convocó a elecciones en 1994, las cuales llevaron a la presidencia a Fernando Henrique Cardoso, al año siguiente (nota de Carlos Figueroa Ibarra).

campana— y su incuestionable derrota frente a Fernando Henrique Cardoso (FHC) en la primera vuelta, tendrían consecuencias irreversibles para el país, y para el propio PT y la izquierda brasileña.

Durante el gobierno de FHC se consolidó ampliamente el consenso neoliberal en el país, anclado en las aceleradas transformaciones implantadas—apertura abrupta de la economía, privatizaciones enfocadas en las empresas estatales, desregulación, retiro del Estado de la economía, promoción del mercado como eje central de las relaciones económicas, criminalización de los movimientos sociales, descrédito de los funcionarios públicos, retracción de las funciones sociales del Estado, precarización de las relaciones laborales—. FHC puso en práctica, hasta donde pudo, su promesa de “voltar la página del getulismo en Brasil”,² es decir, del Estado nacional, regulador, social. Paralelamente, se inició un proceso, lento al principio, de adecuaciones ideológicas en el PT, que desembocaría en el perfil que asumió el gobierno de Lula ocho años después.

Hasta aquel momento, el PT consideraba el déficit público—y sus consecuencias, incluida la inflación— como una cuestión secundaria. El impacto del cambio a favor de FHC también alcanzó al PT. El primer elemento significativo de las transformaciones—incluso por el carácter simbólico del tema— provino de la posición del PT en relación con el pago de la deuda externa, que pasó del no pago a la suspensión de pagos, con auditoría, para derivar, finalmente, en 2002 con su “Carta a los brasileños”, a favor del cumplimiento de todos los compromisos, incluyendo de manera central el pago de la deuda externa y la renuncia a cualquier tipo de moratoria o renegociación, así como del abandono de toda forma de regulación al capital financiero, el cual se había vuelto hegemónico y determinaba el funcionamiento total de la economía brasileña, comenzando por el propio Estado, “financierizado” también a causa de la deuda y el superávit fiscal, que volvía intocables, inafectables los recursos para pagar la deuda. La independencia del Banco Central era un corolario obligatorio. Se marchaba en el sentido de incorporar la estabilidad monetaria como una conquista consensuada.

Esta nueva visión sobre la cuestión de la deuda traía otras, entre las que sobresale la abolición del tema del

² Por el presidente brasileño Getulio Vargas (1930-45 y 1950-54), (nota del traductor).

imperialismo. Si la deuda remitía a una visión de expoliación externa por la deuda misma y el pago de sus intereses, y por sus renegociaciones, con las cartas de intención y sus condicionamientos, la nueva visión abolía la posibilidad de cuestionar tanto el endeudamiento como el sometimiento externo de la explotación imperial. El gobierno de Lula retomará el tema de la integración regional como una cuestión de asociación con los países del Sur del continente y del mundo, mediante inserciones internacionales similares, sin renunciar al rescate del campo de poder y a pesar de la explotación en que están inmersas las relaciones Norte-Sur.

Al mismo tiempo, el PT incorporó el consenso construido por el gobierno de FHC respecto de priorizar el combate a la inflación. Este tema había planteado un riesgo y la imagen de Lula estuvo siempre vinculada a situaciones de riesgo, a desafíos que producían incertidumbre en amplios sectores de las clases medias. Así, la incorporación de una preocupación como la inflación sería uno de los pilares de las transformaciones ideológicas del PT, como consecuencia de la instauración de la hegemonía neoliberal.

Esas transformaciones ideológicas estuvieron acompañadas de modificaciones significativas en la inserción social del PT. Durante el Congreso realizado en Pernambuco, en diciembre de 2000, una investigación reveló cómo se manifestaron dichas transformaciones en la composición de los delegados. Más del 70 por ciento de ellos no tenía militancia de base, sino que estaban insertos en otro tipo de estructuras: organizaciones del partido o sindicales, asesoría parlamentaria, empresas estatales, gobiernos, etcétera. Además, había tenido lugar un aumento significativo de la edad promedio. Lo anterior reflejaba un ente social muy distinto a aquel de la fundación y que conformó el PT cuando menos a lo largo de la década de 1980.

La candidatura de Lula a la Presidencia, en 1998, ya expresaba esas transformaciones en el perfil ideológico del PT. Revelaba una indefinición del partido respecto del éxito electoral del Plan Real.³ La economía estaba al borde de una nueva quiebra —como quedó claro rápidamente con la crisis de enero de 1999—, pero Lula, temeroso de seguir siendo identificado con una imagen

de crisis, catastrofista, decidió eludir el tema. Su campaña no era consistente ni se apoyó en un proyecto alternativo al modelo neoliberal de FHC, parecía resignado frente al nuevo consenso.

A partir de 1994 la izquierda pasó de la ofensiva a la defensiva. Este proceso había comenzado a principios del gobierno de Collor de Mello, aunque las manifestaciones por su *impeachment* dieron un nuevo aliento al movimiento popular. Sin embargo, no era la continuación directa de la campaña presidencial de Lula en 1989, sino un espasmo, un remanente de un periodo ya cerrado, con la hegemonía neoliberal, que había resultado de la ofensiva por parte de la derecha. Tan es así que, derribado Collor de Mello, su sustituto, Itamar Franco, fue el instrumento para la implementación del modelo neoliberal, no obstante su pasado como opositor en el Partido del Movimiento Democrático Brasileño. Fue por sus manos que FHC fue llevado al Ministerio de Hacienda —desde donde preparó el lanzamiento del Plan Real— y de ahí al Palácio do Planalto.⁴

El proyecto planteado por Collor de Mello y puesto en práctica, enseguida, por FCH, significó la reanudación de la iniciativa de la derecha con el triunfo ideológico del liberalismo. El mismo fenómeno predominante ya a escala mundial y en el entorno latinoamericano, al cual Brasil parecía inmune, corriendo a contramano, se imponía también aquí. La derecha se modernizaba, asumía un discurso agresivo, coherente con el surgimiento del mundo unipolar y el fracaso no sólo de la URSS —y, con ésta, del socialismo tal cual era entendido hasta entonces—, sino del modelo keynesiano, de bienestar social, de intervención social del Estado. Así, se transformaba radicalmente la correlación de fuerzas entre los grandes bloques sociales y políticos, todo ello precedido por un periodo de transición durante la segunda mitad de los años ochenta.

De ese modo se constituyó una nueva hegemonía liberal en Brasil, que no sólo implicaba el entorno donde la izquierda comenzaba a actuar, sino que la afectaba. Dicha hegemonía no perdonó a la izquierda, que resultó impactada por aquellas ideas y prácticas. La identificación de la democracia con la democracia liberal, la consideración de las alternativas económicas en el marco del capitalismo y de un contexto mundial sin incluir el punto de referencia de la hegemonía im-

³ El autor se refiere a la experiencia de las elecciones de 1994 donde FHC capitalizó su papel como coautor del Plan Real para encarar la crisis en la que estaba sumido el país como consecuencia de la salida de Collor de Mello del gobierno (nota del traductor).

⁴ Sede del poder presidencial brasileño (nota del traductor).

perial como factor determinante fueron tres elementos que representaron una reconversión ideológica de gran significación. De fuerza antisistema, el PT se convirtió, primero, en una fuerza reformista, de carácter socialdemócrata, y luego de las transformaciones operadas en la campaña electoral y el primer mandato presidencial de Lula, en un híbrido de social-liberal, hegemónico, con una política externa soberana, que lo aleja de cualquier semejanza con la “tercera vía” de Tony Blair y con las políticas sociales redistributivas.

La lectura del fenómeno Lula tiene desconcertados a sectores de derecha e izquierda cuando pretenden clasificarlo. Al no ser capaces de descifrarlo terminan devorados por el enigma.

EL ENIGMA: EL VERDADERO LULA

Ningún mejor contraste que, el mismo año en el que caía el Muro de Berlín y se anunciaba el fin de la URSS y el mundo socialista, en las postrimerías del régimen sandinista, en 1989, Lula, un líder sindicalista de base, presidente del PT, llegara a la segunda vuelta electoral y casi fuera electo presidente de Brasil. ¿Premonición de una nueva izquierda o vestigio de la vieja izquierda derrotada?

Lula aparecía como la punta de un inmenso iceberg de fuerza social y política. Había algunos síntomas preocupantes, como la falta de grandes movilizaciones populares. Las únicas excepciones eran las marchas de los sin tierra, aunque sin articulación orgánica estrecha con las otras vertientes de izquierda —ni siquiera con Lula, el PT, la Central Única de los Trabajadores o los mismos gobiernos municipales del PT—. El Foro Social Mundial (FSM), más debido a las fuerzas fuera de Brasil —Vía Campesina, ATTAC, José Bové, etcétera—, mostraba mayor empatía con el Movimiento de los Sin Tierra (MST).

Otros síntomas significativos: las políticas de “presupuesto participativo” nunca fueron parte de las plataformas políticas nacionales del PT ni de las campañas de Lula. Aparte, el FSM fue convocado con la participación directa de los gobiernos municipales y estatal del PT en Rio Grande do Sul. La dirección nacional y el propio Lula fueron invitados a participar, aunque no formaron parte de las orientaciones del FSM. La política de alianzas internacionales de la dirección nacional del PT y Lula pasaba fundamentalmente por el Foro de Sao Paulo en el plano latinoamericano y por las que

estableció con la socialdemocracia a nivel europeo, pero no prioritariamente por el FSM. Asimismo, el PT comenzaba a tener relaciones difíciles con el MST. A todo esto es necesario añadir la relativa autonomía que fue alcanzando Lula respecto del PT.

Las alianzas que Lula fue estableciendo estaban determinadas por aquella autonomía, así como por formulaciones ideológicas que se aproximaban a estos criterios de gobernabilidad: ajuste fiscal, deuda externa y proyecto de desarrollo. Inicialmente se hicieron alianzas con el gran capital industrial nacional, surgiendo un nuevo horizonte en las políticas aliancistas, sin mayor debate partidario acerca de su significado. Quedaba abierto, así, el frente para que el PT comenzase a renunciar al proyecto basado en la hegemonía de los trabajadores. Hasta ese momento, el proyecto petista —y en particular el sentido de la candidatura de Lula— tenía como referencia los proyectos socialdemócratas, con el referente social de la clase trabajadora como elemento central. A partir de allí comenzó un deslizamiento en el sentido de su naturaleza de clase.

El gobierno de Lula estableció la difícil y contradictoria convivencia entre la hegemonía del capital financiero —representado por la continuidad de la política financiera heredada de FCH, priorizando el ajuste fiscal y la estabilidad monetaria sobre la prometida prioridad de lo social, con autonomía de facto del Banco Central— y políticas sociales redistributivas, así como una política externa independiente. Las políticas sociales, en el contexto de esa subordinación a las metas de la política económico-financiera, no podían tener el carácter universalizante que supondrían la centralidad de la política de empleo, la ampliación del mercado interno de consumo de masas y la universalización de los derechos sociales. Esto habría requerido su centralidad, con aumento sistemático de los salarios y criterios de empleo formal como una de las metas centrales del gobierno, lo mismo que la ampliación sistemática de la reforma agraria y de los derechos a la salud, educación, cultura, saneamiento básico, apoyo a la soberanía alimentaria y a la economía familiar en el campo, entre otras medidas con un sentido social definido.

Las políticas sociales se guiarán por criterios de asistencia social, mediante la combinación de diferentes mecanismos; desde la canasta básica familiar con la matrícula y la asistencia escolar como contrapartida, pasando por los micro-créditos, incremento sistemático del poder adquisitivo del salario mínimo, elevación de

los empleos formales, control de precios de los productos alimenticios y electrificación rural. Fue a través de esos mecanismos de redistribución de la riqueza que algunos de los objetivos defendidos originalmente por el PT fueron alcanzados, al menos en parte: redistribución de la riqueza, aumento del empleo formal y expansión del mercado interno de consumo de masas, entre otros. El resultado fue la mejoría generalizada en el nivel de vida de las capas más pobres de la población, principalmente en el nordeste del país y las periferias de las grandes metrópolis, reduciendo, por primera vez, los índices de desigualdad social. Cualquier descalificación de esa política como “asistencialista” ignora, a causa de una perspectiva reduccionista, lo que significa en la transformación del nivel de vida de los 50 millones de personas más pobres de Brasil un aumento significativo en su poder de consumo y en el acceso a bienes indispensables para una sobrevivencia digna y la incorporación de los más pobres a nuevas esferas de consumo.

La dictadura del ajuste fiscal —encarnada en la presencia determinante de Antonio Palocci durante los tres primeros años del primer mandato— definió el rostro inicial del gobierno de Lula, que se hacía acompañar de un discurso desmovilizador y una política que no conducía a la economía a retomar su ciclo expansivo ni al gobierno a priorizar las políticas sociales. Las novedades estaban básicamente en la política exterior, en que el gobierno brasileño fue el protagonista en la fase final de liquidación de la viabilidad del ALCA, abriendo terreno para nuevas formas de integración regional, y la política cultural, con enorme creatividad de Gilberto Gil. En cambio, el gobierno estaba paralizado por el durísimo ajuste fiscal de Palocci.

Los elementos de continuidad con el gobierno de FHC son claros: se hallan en los ejes de la política financiera, especialmente los objetivos centrales de la estabilidad monetaria, reflejados en las altas tasas de interés, la independencia del Banco Central, el mantenimiento del superávit primario, de forma paralela al papel central de la exportación —donde los productos primarios volvieron a alcanzar preeminencia, incluida la soja transgénica—. Los elementos diferenciadores —que coinciden con los aspectos positivos del gobierno— vienen especialmente de la política exterior y las políticas sociales, pero también del aumento significativo en el empleo formal, la reconstitución del aparato estatal y su capacidad de fomento al desarrollo que, eliminado antes por el gobierno de FHC, volvió a la agenda nacional con el gobierno de Lula. Por otro lado, fue frenado el progra-

ma de privatización de empresas estatales, así como el adelgazamiento del aparato estatal, que experimentó la recomposición de una parte de sus funcionarios, con niveles de recategorización salarial.

De un alineamiento absoluto a la política exterior de Estados Unidos, la cual había llevado a Brasil a ser el principal responsable de la introducción del ALCA, a partir del gobierno de Lula se pasó a una política que privilegia la integración regional de América Latina y el Sur del mundo. Aunque Brasil presidía con Estados Unidos el ALCA, al asumir la responsabilidad de hacer inviable su aplicación, el país optó al mismo tiempo por el Mercosur como alternativa a los tratados de libre comercio. El resultado es un híbrido de difícil caracterización en su conjunto. En las propias palabras de Lula, al momento de su elección para un segundo mandato presidencial, “Nunca los ricos ganaron tanto, nunca los pobres mejoraron tanto su nivel de vida”. Cualquier análisis unilateral conduce a serios equívocos; a tal punto que es más fácil decir lo que el gobierno de Lula no es que lo que realmente es.

Hay quien lo caracteriza como “una versión tropical del blairismo”,⁵ de la tercera vía europea, una humanización del neoliberalismo y la globalización; algo como lo que se denominaba “social-liberalismo”, una “tercera vía” entre el fundamentalismo de mercado de Reagan y Thatcher, expresado en América Latina por Pinochet, pero también Menem y FHC, entre otros, y las políticas en las cuales el Estado tenía funciones estratégicas. Se preservó el modelo económico heredado, ambiguamente, caracterizándolo como una “herencia maldita” que respondía a la fragilidad de la situación económica y, según el todo-poderoso durante la primera parte del gobierno de Lula, el ministro de Economía Antonio Palocci, a que “no se cambia de médico durante una enfermedad”, con su lenguaje de médico travestido de economista. Se mantuvo el modelo, se justificaron las posturas conservadoras —el Banco Central, contra la opinión de Lula, durante la primera reunión del Comité de Política Monetaria, en enero de 2003, elevó la ya de por sí alta tasa de interés del 25 por ciento al 25.5 por ciento, demostrando su independencia del gobierno y evidenciando ante el gran empresariado la continuidad de la orientación económica heredada—. Lula, quien

⁵ Por el socialdemócrata Tony Blair, líder del Partido Laborista (1994-2007) y primer ministro británico (1997-2007) (nota del traductor).

había dicho varias veces durante su campaña electoral que llevaría a los ministros a conocer el Brasil profundo, *enlodándose los pantalones*, y que haría que los ministros económicos conocieran los efectos sociales crueles producidos por el alza a la tasa de interés, acabó sometándose a la dinámica heredada, legitimándola desde el primer mes de su gobierno.

La primera etapa de los dos mandatos del gobierno de Lula estuvo marcada por la hegemonía incuestionada de Antonio Palocci y su interpretación ortodoxa del sostenimiento del modelo económico heredado. Se privilegió el ajuste fiscal, por lo cual los recursos para las políticas sociales quedaron sometidos al severo filtro del ministro de Economía, dando como resultado la incapacidad de la economía para retomar el crecimiento, el ínfimo resultado de las políticas sociales, el aumento irrisorio del salario mínimo, la lentitud de la reforma agraria, el distanciamiento con los movimientos sociales y un discurso de Lula desmovilizador, apuntando todo ello hacia un régimen que mantendría el modelo neoliberal, incumpliendo las prioridades sociales prometidas por Lula.

Fue en tal contexto que sucesivas convulsiones cimbraron al gobierno, afectando su estabilidad —y hasta su continuidad— e impulsando transformaciones de consecuencias imprevistas tanto para el gobierno como para la oposición. Una agresiva campaña de denuncias contra el gobierno —acusado de comprar aliados mediante sobornos— alcanzó el núcleo fundamental de éste, orillando a Lula a prescindir de la mayoría de quienes habían sido históricamente sus asesores y, al agudizarse aquella crisis, del propio Antonio Palocci.

Las reestructuraciones a las que fue obligado dieron nuevos contornos a su gobierno. Los dos principales cambios dieron un tono distinto al gobierno desde mediados del tercer año, fisonomía que se consolidó a partir de entonces. La designación de Dilma Rousseff a la Casa Civil,⁶ para coordinar las acciones económicas y sociales del gobierno, así como la sustitución de Palocci por un ministro desarrollista —Guido Mantega— y no por alguien que diera continuidad a la anterior orientación del Ministerio de Economía, son la causa de las transformaciones que, sin rupturas afortunadamente, dieron

nueva orientación al gobierno; de la reelección de Lula, y del respaldo popular que alcanzó —80 por ciento— a mediados de su segundo mandato.

El gobierno no varió los referentes esenciales de su política económica —superávit fiscal, independencia de hecho del Banco Central y papel predominante de la agroindustria de exportación basada en la soja y los transgénicos—; sin embargo, aprovechando un escenario internacional propicio y la liberación de recursos para inversión estatal en políticas sociales, pudo reequilibrar su actuación. La reanudación del crecimiento económico chocaba con los diagnósticos según los cuales sin una ruptura con el modelo neoliberal no podría retomarse tal crecimiento ni serían posibles políticas sociales redistributivas. Pero este punto de vista no tomaba en cuenta las transformaciones operadas dentro del gobierno, como tampoco la distinción entre la política financiera y la económica, y cómo ello permitió la gran ampliación de las políticas públicas, que dejaban de ser focalizadas —como en la primera versión, ya superada, de *Fome zero*⁷ para alcanzar relieve masivo.

El nuevo ciclo expansivo, combinando exportaciones, diversificación del mercado externo y ampliación del mercado interno de consumo, esta vez con un peso determinante del consumo popular, promovió que se retomara el crecimiento, al mismo tiempo que la combinación de las políticas sociales mencionadas produjo, por primera vez, una conversión en la distribución de la riqueza favorable a los sectores más pobres —las llamadas clases A y B—, que dejaron de ser la mayoría entre la población, posición ocupada enseguida por la clase C, pasando a representar aquellas el 39 por ciento y éstas el 46 por ciento. Creció de manera sostenida el empleo formal, lo mismo que, en general, los empleos de baja calificación, revirtiéndose, en tanto, uno de los peores o el peor efecto negativo directo del neoliberalismo para el grueso de la población.

En cambio, no fue contenido el otro gran efecto negativo del neoliberalismo: la “financierización” de la economía. Al mantener las mayores tasas reales de interés del mundo, con prácticamente ninguna tributación y total liquidez, junto a la autonomía real del Banco

⁶ Órgano de la Presidencia de la República con funciones de asesoría al presidente, así como implementación, coordinación, protocolización y seguimiento de acciones de gobierno, y está también a cargo de un(a) ministro(a) jefe(a), (nota del traductor).

⁷ *Fome zero* (“Hambre cero”, en castellano) es como se denomina el programa del presidente Lula implementado en 2003, a través del Ministerio de Desarrollo Social y Combate al Hambre, para garantizar el acceso de los más pobres a una alimentación básica (nota del traductor).

Central y el pago del superávit fiscal —expresiones de ello—, y la agroindustria de exportación —la cual a su vez choca con la reforma agraria, la economía familiar y la seguridad alimentaria—, se configura la alianza del gobierno con el gran capital, con la hegemonía del capital financiero dentro del bloque pluriclasista en el poder.

Así, el vaso puede apreciarse medio lleno o medio vacío. El gobierno de Lula puede ser caracterizado como un buen gestor del neoliberalismo que, aparte de darle continuidad, lo complementa con políticas sociales, recuperando legitimidad para el Estado, deteriorado durante el gobierno más ortodoxamente neoliberal de FHC. Puede también ser caracterizado como el gobierno de la política exterior independiente, que tornó inviable, en la que debería ser su fase final, el ALCA, y que privilegia los procesos de integración regional, aliado con gobiernos como los de Hugo Chávez, Rafael Correa, Evo Morales, entre otros —incluyendo al de Cuba—. Asimismo, como el que mejoró más el nivel de vida del grueso del pueblo brasileño, especialmente de los más pobres, en el país más desigual del continente más desigual del mundo. Y, por último, como aquel gobierno que contuvo el proceso de adelgazamiento del Estado y fortaleció el sistema educativo y de salud públicos, expandiendo de forma creativa la política cultural, entre otros aspectos positivos.

La primera de estas caracterizaciones llevó a las tendencias de extrema izquierda a considerar al gobierno de Lula como su enemigo fundamental, a establecer alianzas con la derecha tradicional —incluyendo su núcleo más fuerte, los medios privados— y de esa manera aislarse de los aspectos positivos del gobierno, entre ellos su política exterior y sus políticas sociales. Se produjo un fracaso en la tentativa de construir una fuerza a la izquierda del PT, porque no consideraba ningún tipo de alianza con éste, sólo un combate directo, con todas las confusiones de identificación con la derecha, la cual sigue haciendo la guerra frontalmente al gobierno de Lula. En consecuencia, la polarización de la política nacional prosigue entre el gobierno y la oposición de derecha, convirtiendo a ésta en la alternativa política a Lula, sin que haya posibilidad alguna para la izquierda, hoy completamente neutralizada.

La consideración del gobierno de Lula a partir de sus contradicciones internas permite, en contraste, distinguir sus aspectos positivos, luchar por su fortalecimiento y, duramente, contra sus elementos conservadores; permite

luchar por la construcción de una plataforma antineoliberal y para que el gobierno que vaya a suceder al de Lula pueda avanzar en esa dirección. Al mismo tiempo, posibilita trabajar en el fortalecimiento de las alianzas internacionales de Brasil, en particular las regionales, lo cual beneficia a gobiernos como los de Bolivia, Venezuela, Ecuador y Cuba, y plantea a la izquierda su otra gran tarea: contribuir en la organización de las inmensas capas pobres de la población que apoyan a Lula, para la promoción de sus derechos económicos y sociales.

En un balance de pros y contras, hay otros aspectos. Los negativos: represión y no incentivos a radios comunitarias; lentitud en la delimitación de las tierras indígenas, así como en la reforma agraria, y no apertura de los archivos de la dictadura, entre otros. Y los positivos: las políticas cultural y educativa y el comienzo de una TV pública, entre muchos otros. La lista podría seguir, pero ni ello serviría para ponderar y alcanzar un resultado de superávit o déficit. El análisis político es cualitativo, parte de y se orienta por criterios estratégicos generales.

En este caso, el criterio que definimos como el fundamental en América Latina vale para Brasil: la prioridad de la integración regional sobre los tratados de libre comercio y la promoción de los derechos económicos y sociales de los más pobres, sobre todo en un país con los grados de desigualdad del nuestro. Frente a ese elemento que caracteriza la naturaleza de los gobiernos latinoamericanos, predomina el carácter progresista del gobierno de Lula, en virtud de que contribuye con la formación de un mundo multipolar, privilegiando los procesos de integración regional y las alianzas Sur-Sur, además del papel del Grupo de los 20 y otras iniciativas de esa naturaleza.

Tras un periodo defensivo, a lo largo de toda la década de los noventa, el gobierno de Lula presenta significados ambiguos para la izquierda. No pone en práctica el programa histórico del PT, no centra sus acciones en los ideales del Foro Social Mundial, no pone en práctica la reforma agraria preconizada por el MST y el “presupuesto participativo” no forma parte de su plataforma. Juzgado a la luz de las propuestas tradicionales de la izquierda brasileña, el gobierno de Lula parece un fenómeno extraño. Sin embargo, teniendo como telón de fondo el gobierno de FHC y las correlaciones de fuerza del periodo histórico de hegemonía neoliberal e imperial estadounidense, las diferencias bastan para definir un gobierno de distinta naturaleza. La diferen-

cia esencial es que un gobierno de izquierda en 1989 habría encontrado una relación de fuerzas —nacional e internacional— muy diferente de aquel que enfrentó al comenzar el nuevo siglo.

Temas como el combate a la inflación, la seguridad pública, la identificación de la libre expresión con la prensa privada, la lucha contra la tributación considerada excesiva, la identificación de democracia con democracia liberal pasaron a ocupar un lugar central en la agenda política e ideológica, definiendo el marco de la llamada opinión pública. Las campañas de criminalización de las ocupaciones de tierra por parte de los sin tierra promovieron una imagen violenta de ellos, casi como si fueran responsables de la violencia en el campo brasileño. El deterioro del Estado, a causa de los gastos, los impuestos, la burocracia, la regulación, la ineficiencia de los servidores públicos, la corrupción y el clientelismo proyectaron una imagen fundamentalmente negativa de aquel.

Esas transformaciones ideológicas regresivas complementaron un contexto de moderación y redefinición de la identidad de los partidos y el debilitamiento de la capacidad de movilización de los movimientos sociales. Paralelamente, la globalización promovió niveles superiores de apertura de las economías, preeminencia del capital financiero e internacionalización de las economías y las empresas. Lo anterior se convirtió en realidad incuestionable en países como Brasil, México, Argentina, Chile, Perú y Colombia, entre otros del continente. En éstos se agotaron las bases sociales para un bloque nacional y popular del tipo de los que existieron anteriormente. El gran capital, en sus diversas vertientes, se internacionalizó, sea por su composición, sea por su integración a los grandes circuitos internacionales. Sumado todo esto al retroceso en la organización de los movimientos populares y en la conciencia social, el resultado es un tránsito radicalmente negativo para la lucha de la izquierda. El referente de lucha antineoliberal es el más adecuado, como punto de partida, para reanudar la iniciativa por parte de la izquierda, de su histórica lucha anticapitalista y socialista.

Para esto, en aquellos países, factores como los de frenar los procesos de privatización de empresas públicas, el debilitamiento del Estado y la precarización de las relaciones laborales, además del fortalecimiento del mercado interno de consumo popular, la capacidad de regulación estatal, la ejecución de políticas sociales y de políticas externas que privilegien los procesos de integración regional, son elementos de apoyo para la reconstrucción de una perspectiva de izquierda que no pueden desdeñarse. La alternativa a esto es una estéril y errónea política de oposición frontal a gobiernos como los de Lula, Kirchner, Tabaré Vázquez y Fernando Lugo, pretendiendo equipararlos con sus antecesores, sin comprender las diferencias, con análisis que exageran su carácter contradictorio, desconociendo abiertamente sus elementos positivos y haciendo caracterizaciones parciales y deformadas acerca de ellos.

Dos estrategias son posibles ante gobiernos contradictorios e híbridos como los mencionados. Una es la oposición frontal, con el agotamiento y la reducción de políticas doctrinarias y de ultraizquierda, sin ninguna capacidad de acumulación de fuerzas ni construcción de proyectos y bloques alternativos; tal estrategia está comprometida con la concepción de que el gobierno —de Lula, Kirchner o Tabaré— es el enemigo fundamental; que es el mejor administrador del neoliberalismo y debe ser derrotado, para cuyo objetivo vale aun la alianza con la derecha tradicional —dichos gobiernos, en suma, serían las nuevas derechas. La otra estrategia es la alianza con los sectores progresistas de los gobiernos en cuestión, buscando fortalecer los elementos apuntados y enfocar el ataque contra la hegemonía del capital financiero, las alianzas con la agroindustria, la autonomía del Banco Central y los demás aspectos negativos de tales gobiernos.

Únicamente estas dos posiciones políticas son posibles, pero sólo una de ellas permite articularse con otros procesos latinoamericanos —como el venezolano, el boliviano, el ecuatoriano o el cubano— e iniciar un proceso nacional de acumulación de fuerzas en el ámbito de la izquierda. ■

